Crisállida
Investigación e Incidencia para la Paz y la Vida

PUPA

Cuadernos de pensamiento
crítico e incubación política

N°1
Bajo la Espuma del Presente

Cali, Valle del Cauca, Colombia
Agosto de 2026

Crisállida

Corporación Crisállida
Investigación e incidencia para la paz y la vida

Primera edición
Agosto de 2026

Grupo de trabajo
William A. Monsalve
Natalia Sandoval
Fabricio Muñoz
María Paula Martínez
Giovanni Libreros
Jhonny Alejandro Marín

Diseño editorial y diagramación
María Paula Martínez

Contacto
corporacioncrisallida@gmail.com

Nit
902089601-1

Lugar de edición
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Índice

5 Bajo la espuma del presente
Nota editorial

12 Aspectos geopolíticos del retorno de la ultraderecha colombiana
William Monsalve

25 Detectar y combatir el neofascismo en el campo educativo
Sergio de Zubiría Samper

40 La derecha en el gobierno, la hegemonía en disputa
Fabricio Muñoz

52 Después del progresismo
Giovanni Libreros

68 La configuración del enemigo político
Jhonny Alejandro Marin C.

NOTA EDITORIAL

Bajo la espuma del presente

CRISÁLLIDA nace de una pregunta que atraviesa nuestro trabajo y que tiene que ver con la manera en que una sociedad cambia, con aquello que permanece bajo esos cambios y con las fuerzas que hacen posible que unas transformaciones avancen mientras otras se detienen. Como corporación dedicada a la investigación social, el análisis crítico y la incidencia, estudiamos los territorios, los conflictos que los recorren y las formas de organización, resistencia y creación que allí aparecen, porque comprender una sociedad exige mirar también a quienes la viven y la disputan desde lugares que rara vez ocupan el centro de la conversación pública. Desde esa preocupación surge esta publicación, que reúne distintas lecturas de un momento político cuya velocidad puede hacernos olvidar que los acontecimientos pasan rápido y que sus consecuencias suelen permanecer mucho más tiempo.

Colombia llega a este momento después de un ciclo que comenzó a hacerse visible en las calles durante el estallido social de 2021, encontró una expresión institucional con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y desemboca ahora en el retorno de la derecha al Gobierno. Fueron años en los que muchas cosas cambiaron de lugar, en los que demandas largamente apartadas de las instituciones llegaron al centro de la escena política y millones de personas depositaron en el llamado gobierno del cambio una expectativa de

transformación que excedía las posibilidades de un periodo presidencial.

Hubo reformas, conflictos, avances y contradicciones, pero también cambió algo más difícil de medir, las preguntas que la sociedad colombiana comenzó a hacerse sobre el poder, el Estado y la posibilidad de transformarlo. El triunfo de Abelardo de la Espriella abre otra etapa y nos obliga a mirar qué ha cambiado, qué permanece y qué relaciones de poder comienzan a buscar un nuevo lugar.

De ese movimiento parte el núcleo de esta publicación, que se detiene sobre aquello que empieza a cambiar bajo la superficie del resultado electoral para reconocer qué tipo de régimen comienza a configurarse en Colombia.

Para acercarnos, hay que mirar el país desde varios lugares a la vez, porque un régimen también se revela en la forma en que ordena la economía, transforma las instituciones, entiende la paz y la seguridad, interviene en la educación y la cultura y decide relacionarse con el mundo. Allí una hegemonía encuentra las condiciones para permanecer y también las fuerzas que pueden modificarla o ponerla en crisis. El resultado electoral ha dejado a la derecha en una posición privilegiada para reorganizar las prioridades del Estado y buscar una nueva dirección política de la sociedad, mientras las relaciones de fuerza siguen abiertas y buena parte de los conflictos que dieron origen al ciclo anterior permanecen activos bajo nuevas condiciones.

Los primeros días del Gobierno ya permiten reconocer algunas señales. La incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, promovido por Estados Unidos, y el anuncio del

secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre operaciones militares conjuntas contra organizaciones calificadas como narcoterroristas sitúan en el centro del debate la soberanía, la autonomía para decidir sobre la guerra y la paz y la presencia militar extranjera en territorio colombiano. El restablecimiento de la alianza con Israel, el traslado de la embajada a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán marcan, a su vez, un giro frente al genocidio que el Estado de Israel ejecuta contra la población palestina en Gaza y frente a la posición asumida por Colombia durante el gobierno anterior. Estas decisiones dejan ver el lugar que el nuevo Gobierno busca ocupar en el mundo, más cerca de Washington y Tel Aviv, y obligan a considerar las consecuencias que esta orientación puede tener sobre la soberanía, los derechos humanos y el papel de Colombia en un orden internacional atravesado por conflictos cuya dimensión apenas empezamos a comprender.

Esa orientación encuentra dentro del país territorios donde sus consecuencias adquieren otra densidad. En el Catatumbo, los bombardeos dejaron campesinos heridos y viviendas afectadas, mientras las advertencias de la Defensoría recuerdan que las operaciones militares recaen sobre comunidades que llevan años viviendo bajo las condiciones de la guerra. En el Cauca, la intensificación de los combates y las denuncias de las comunidades de Cajibío llevan esa misma preocupación hacia otros territorios rurales, donde la confrontación vuelve a entrar en la vida cotidiana de quienes los habitan. La política de seguridad empieza así a recuperar con fuerza una lógica contrainsurgente que ha atravesado al Estado colombiano y que vuelve a colocar a la población campesina frente a los costos de una guerra cuya dirección decide el poder estatal.

Los textos reunidos aquí parten de este presente todavía abierto y lo recorren atendiendo a las relaciones de fuerza, los conflictos y las transformaciones que permiten reconocer el alcance de la nueva etapa. Esta publicación cuenta con la colaboración de la Fundación Walter Benjamín y con el aporte del maestro Sergio de Zubiría, cuya reflexión sobre la educación se suma a este esfuerzo por comprender las transformaciones del presente y las disputas que atraviesan la sociedad colombiana.

Desde allí se abren varias líneas de lectura que organizan el conjunto de la publicación. Los artículos examinan el retorno de la derecha a partir de sus condiciones de posibilidad, de la disputa por la hegemonía y de las formas de autoridad que busca recomponer. También abordan la orientación económica del nuevo gobierno, marcada por la relación entre Estado, capital, mercado y derechos sociales; la redefinición de la seguridad y sus efectos sobre la paz, los derechos humanos y la construcción del enemigo político; la educación como campo de disputa por el sentido común y la formación de subjetividades; y, finalmente, la inserción de Colombia en una coyuntura internacional atravesada por nuevas alianzas, tensiones geopolíticas y disputas regionales.

Para comprender lo que comienza hace falta mirar también lo que acaba de pasar. El gobierno de Petro mostró que las fuerzas sociales surgidas de las calles y los territorios podían llegar a las instituciones y abrir posibilidades que durante mucho tiempo parecían lejanas, pero también encontró límites frente a las estructuras que buscaba transformar. De esa experiencia queda una sociedad con nuevas preguntas, organizaciones fortalecidas por sus avances y límites y conflictos aún abiertos.

El retorno de la derecha inaugura otro momento de esa historia. Su victoria electoral deberá convertirse en dirección política, mientras las fuerzas sociales del ciclo anterior buscan nuevas formas de organización, resistencia e incidencia para seguir interviniendo en el rumbo del país.

Lo que esta publicación pone en discusión permanece abierto porque también permanece abierto el proceso histórico que intentamos comprender. CRISÁLLIDA se sitúa allí, en ese lugar donde investigar significa mirar el presente mientras todavía está ocurriendo y prestar atención a aquello que los acontecimientos dejan ver solo por momentos. Jacques Le Goff decía «Los hechos son sólo la espuma de la historia. Lo importante son los procesos subyacentes.» y quizá esa imagen resulte útil para pensar el tiempo que comienza con el nuevo Gobierno, porque todavía vemos sus primeros movimientos y apenas empezamos a reconocer las fuerzas que buscan acomodarse bajo ellos. Durante los próximos cuatro años muchas de esas tendencias podrán cambiar de forma, encontrar resistencias o adquirir una fuerza que hoy todavía no alcanzamos a medir. Esta publicación nace de ese momento incierto, cuando la historia todavía no ha terminado de decirnos qué está ocurriendo y, sin embargo, ya nos obliga a tomar posición frente a lo que comienza.

La publicación llega en medio de la tragedia provocada por el terremoto que golpeó el occidente del país y ha dejado muertos, desaparecidos, heridos y miles de familias afectadas. Ante una emergencia de esta magnitud, la vida de quienes padecen sus consecuencias debería ocupar el centro de la acción pública, pero la respuesta del Gobierno ha mostrado precariedad, lentitud e incapacidad para comprender el dolor que atraviesa a tantas comunidades. Familias que buscan a sus

desaparecidos, personas que han perdido sus viviendas y territorios golpeados por décadas de abandono enfrentan la tragedia mientras el Estado responde con una distancia que revela su falta de empatía y eficacia. La indolencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella resulta inaceptable.

A quienes han perdido a sus familiares, a quienes continúan buscando a sus desaparecidos y a todas las comunidades afectadas les expresamos nuestra solidaridad. En medio de la tragedia, miles de personas han salido al encuentro de otras, voluntarios, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos que han puesto sus manos, sus recursos y su tiempo en las labores de rescate, en la recolección de alimentos y medicinas y en la llegada de ayuda a los lugares afectados. Hay en ese movimiento una ternura que nace del pueblo y vuelve hacia él, una forma de reconocerse en el dolor de otros y acudir a su encuentro. Desde CRISÁLLIDA nos sumamos a quienes han hecho de la ayuda mutua una expresión viva de un pueblo que cuida a su propio pueblo.

Quizá eso sea también una forma de mirar el presente. Los acontecimientos pasan ante nosotros con una rapidez que a veces hace difícil reconocer aquello que comienza a cambiar debajo de ellos, pero las fuerzas que se ponen en movimiento permanecen y encuentran nuevas formas de aparecer. El Gobierno apenas comienza su recorrido, las relaciones de fuerza todavía están abiertas y la sociedad colombiana conserva la memoria de sus luchas, sus heridas y sus capacidades de organización, y ninguna elección puede borrar aquello que todavía permanece en movimiento. Esta publicación se detiene allí, en ese momento en que la historia todavía conserva algo de incertidumbre y en que mirar con atención puede ser una forma de comprender lo que viene.

Grupo de trabajo Crisállida


01
DIOS ES

COYUNTURA

Aspectos geopolíticos del retorno de la ultraderecha colombiana

*Por William Monsalve**

El triunfo de la ultraderecha en Colombia no hubiese sido posible sin un contexto favorable para sus propósitos, alineada con un marco internacional que conecta con los intereses transnacionales de la Casa Blanca y el sionismo israelí. Colombia hace parte del reordenamiento estratégico del imperialismo norteamericano y para ello, el nuevo gobierno es integralmente incorporado a estos objetivos.

Venezuela fue la puesta en práctica del escenario de intromisión imperial norteamericana, tras la incursión militar sobre su territorio que dio como resultado el secuestro de Nicolas Maduro, el pasado 3 de enero de 2026. Sin duda, la ofensiva de la Casa Blanca es coherente con la dinámica de recuperación de los escenarios esenciales que se han propuesto para disputar la relación de fuerzas con el bloque Asia- pacifico, cuyos actores principales son China y Rusia.

**Analista e investigador político. Columnista, gestor social y defensor de derechos humanos. Presidente y representante legal de la Corporación Crisállida.*

América Latina representa un lugar estratégico para la administración Trump y por ello ha enfocado su ofensiva en recuperar su patio trasero, aprovechando el debilitamiento de los gobiernos progresistas y el retorno del péndulo a la derecha, bajo un modelo neoconservador, auspiciado por el impulso de la inteligencia artificial, que ha permitido crear un marco movilizador de masas entre fanatismo religioso, el populismo y la idea de la salvación restauradora de la sociedad capitalista reeditando los valores morales de la familia, el orden, la seguridad y la sacralidad del disciplinamiento del mercado.

El nuevo viejo mundo conservador

Aunque la historia no se repite, pareciera compartir lugares comunes no superados. Ahora, como hace cien años retornan los viejos discursos nacionalistas, proteccionistas y neoconservadores, cargados de un fuerte condimento populista que llama a las clases medias a alinearse con el viejo anhelo de volver a ser lo que eran, antes que la peste migratoria africana, del medio oriente, el este de Europa y América latina inunden sus países y depreden las escasas despensas de las débiles economías nacionales. Temor, pánico, miedo y pobreza es el combustible suficiente para que vuelva entre las cenizas el proyecto destructivo pero purificador y salvador del fascismo. El orden del caos parece ser una inevitable salida a la actual crisis mundial.

Una crisis de representación social e institucional erosiona el consenso de las democracias liberales occidentales.Allí donde anida el caos y la incertidumbre de la sociedad ante la incapacidad para encontrar salidas a las crisis del capitalismo

con las fórmulas preestablecidas desde 1945, se ha creado el germen para fecundar, madurar y crecer un proyecto de ultraderecha social cada vez más refinado en sus modos y contenidos de acción y movilización.

Podríamos atrevernos a aproximar que ahora, como hace cien años se conectan tres sincronías cíclicas que dan cuenta del fenómeno que erosionan la estabilidad del sistema demo-liberal hoy existente: primero, la disputa de un nuevo escenario geopolítico, encuadrado por un campo bélico en Europa del este, la guerra ruso- ucraniana que es al fin de cuentas, la confrontación velada de la hegemonía política de occidente en decadencia, contra un proyecto emergente de hegemonía transnacional desde oriente. Sin duda, estamos ante los intereses de expansión del capitalismo occidental sobre el este de Europa a fin de frenar el nacimiento del siglo chino.

La segunda sincronía, es el mundo post pandémico que coincide exactamente como en 1919 y 1920 con la reestructuración masiva de la organización civilizatoria, tal cual la conocimos. Los ritmos de la producción capitalista entraron en un enfriamiento a escala planetaria, lo cual ha repercutido en nuevos modos de adaptación de formas de consumo, hábitos y organización del trabajo, que han impulsado la fase digital de la explotación. El siglo XX necesitó guerras y una pandemia para reestructurar la producción y con ello proyectar el esplendor del modelo de acumulación del Estado de Bienestar y posteriormente agilizar las grietas del neoliberalismo. El siglo XXI está produciendo una nueva etapa de organización del capitalismo bajo la dirección del capital cognitivo y la era digital como parte de su ensamblaje de reestructuración y adaptación a los nuevos dominantes del mercado mundial.

La tercera sincronía, es la permanencia de la crisis estructural del sistema capitalista a escala planetaria. Aunque no se parece en los modos de desarrollo a la situación crítica de 1929, la caída en la tasa de ganancia de los grandes capitales sigue elevando la tensión mundial. La hegemonía del dólar norteamericano subordina y empuja la crisis a los países que dependen de ésta, mientras otros centros de producción a gran escala, especialmente en China, empujan al mundo a pensar en una nueva hegemonía comercial, de mercado, política, militar y económica. Hace un siglo la guerra, la pandemia y la crisis económica produjo una nueva hegemonía desde occidente y hoy pareciera que esta dinámica fuera también la partera de un bloque emergente a nivel mundial.

En este orden de ideas, no es casual el resurgimiento de una reedición de proyectos neoconservadores basados en una política proteccionismo económico, cuyo contenido se inspira en el cerramiento de fronteras, en la persecución laboral, constreñimiento de la libertad de movilidad y tránsito al migrante, centrada en una carga nacionalista, xenofóbica y racista que ha permitido abrirles paso a agrupamientos políticos reaccionarios de corte fascista.

El ascensoneoconservador de la ultraderecha internacional es tan solo una reacción a la crisis mundial del capitalismo occidental, es el modo de respuesta a los límites que el sistema mismo ya no permite gestionar por los mecanismos que este preestableció para la resolución de sus controversias internas y por ello, experimenta una fase de ajuste retornando a las dinámicas más cerradas y violentas que le permita su reestructuración parcial, incluyendo amenazar sus propias lógicas institucionales y orgánicas de ordenamiento político y económico.

Trump es la expresión del síntoma de un modo de resolución de la crisis capitalista por parte del sector industrial- tecno financiero, la manera en que el sistema construye una respuesta capaz de transgredir sus propios límites para reajustar la estructura que ya no puede rehacerse con sus mecanismos de resolución. El libre cambio, la ortodoxia liberal y los modelos de regulación sistémica han sido relegados por una cohorte transnacional conservadora, capaz de dirigir la operación de reducción del Estado y corporativizarlo hasta desplazar toda la institucionalidad que sustenta su aparataje.

De esta manera, anidan en las dinámicas neoconservadoras con sus diversas aristas, modos de configuración orgánica y política de reacción. En Europa la tendencia neoconservadora toma características fascistas, alentadas por el resurgimiento de grupos que han retomado el viejo testamento de odio contra la migración, a fin abrir de alianzas con las temerosas clases medias que, golpeadas por la crisis económica, buscan salidas rápidas a problemas estructurales.

En Estados Unidos, todo indica que un sector del poder industrial, tecno financiero ha inoculado las entrañas de los grupos dominantes del establecimiento para reestablecer la dirección del Estado, bajo una nueva modalidad de consenso público represivo civil, alentado por el racismo y la venganza social contra el migrante, basado en un discurso nacionalista radical. La nueva clase política de dirigentes tecno financiera norteamericana, colige con la mentalidad pragmática del sionismo israelí que lee como amenaza toda pluralidad que no se someta sus intereses.

Una serie de factores diferenciados del neoconservadurismo que coligen entre fascismo, autoritarismo, dictadura civil,

están haciéndose latentes en la reacción de la crisis capitalista que erosiona el sistema democrático- liberal de occidente. Ello explica por qué en América Latina, los gobiernos aliados a Trump se han alineado hacia una visión de reacción contra los gobiernos social demócratas y progresistas de los últimos quince años y han incorporado una política mixta entre neoliberalismo autoritario y neoconservadurismo corporativo tendiente al fascismo de nuevo tipo.

La balanza de los imperialismos

Ahora bien, se está experimentando una dinámica de reordenamiento estratégico de las fuerzas bélicas Inter imperialistas a escala planetaria. Tras el anuncio de China y Rusia en junio pasado, de construir "la promoción de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales", se entiende que por ahora el balance de las fuerzas será distribuyendo los escenarios esenciales en las regiones en los que la hegemonía política, económica y militar, comparten espacios comunes.

La zona euro-Asia y América Latina son sin duda, los dos campos de distribución de las hegemonías en occidente y oriente. Las disputas ahora se concentran en la región del Sahel africano y el oriente próximo. Las materias primas, las tierras raras, los minerales preciados para la transición energética representan la nueva guerra por los recursos naturales.

Las rutas aéreas, marítimas y terrestres son parte del preciado botín en la estructura logística que caracteriza la guerra comercial entre potencias: la circulación masiva de mercancías

en menor tiempo para aumentar la cadena de valor y con ello incrementar las ganancias. La disputa es entre la nueva ruta de la seda orientada desde Beijing y el Corredor Económico India-Oriente Medio -Europa (IMEC por sus siglas en ingles), respaldas por el G-20 que lidera EE.UU.

La distribución regional del balance de poder mundial está en la concentración de las fuentes energéticas y en las rutas de abastecimiento de las mercancías, por ello, el medio oriente ha sido el objetivo central del proceso de remozamiento de la nueva fase logística del capital transnacional. Mientras el pacífico y las conexiones entre el Mar Negro y Rojo sigan siendo un tránsito en disputa para la recepción de los abastecimientos entre continentes que reúnen fuentes producción a gran escala, la ofensiva militar no parará hasta que el control hegemónico que occidente reclama para sí quede totalmente bajo su poder.

Es claro que Israel ha pasado a ser el actor militar directo en la estrategia de expansión de la nueva ruta IMEC, junto con el apoyo de los socios comerciales que intentan hacerse al control del Mar Rojo y el Mar Negro. La incursión militar de Israel con apoyo norteamericano sobre Irán es tan solo la punta del iceberg de una estrategia en expansión para bloquear las rutas marítimas que abastecen el petróleo a China.

Boicotear a la máquina productiva China, reducir su capacidad logística y cercar sus rutas es parte del plan operativo de recomposición de la hegemonía comercial, militar y política del imperialismo occidental. El nuevo teatro de operaciones militares y comerciales en oriente medio no tiene otra justificación que limpiar las resistencias afines al bloque asiático que lidera China y Rusia, por ello, la ofensiva sobre

El Escudo de las Américas

Sin duda, hemos llegado demasiado tarde al futuro. Nuestros días parecen que no tiene nada de original al pasado y ahora parece que reeditamos el lenguaje de la guerra fría en el continente. Hemos vuelto a la vieja narrativa de las cortinas o escudos para aislarnos del mundo.

La Casa Blanca ha preparado un plan de contención y bloqueo a la política de alianzas internacionales que Beijing y el Kremlin han adelantado en el continente desde principios de la década de los años noventa del siglo XX. Dicho plan se basa en crear un bloque de países con gobiernos serviles a sus intereses, bajo el pomposo nombre "Escudo de las Américas", cuyo supuesto objetivo es combatir el crimen transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, controlar la migración y propender por una estrategia conjunta de seguridad en la región.

Este bloque está conformado por los gobiernos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Guyana, Honduras y Trinidad y Tobago. Estos ahora se comportan como el eje de alineación y correlación de la política exterior de EEUU en la región, el cual cumple un papel de subordinación condicionada al disciplinamiento de la ayuda económica y la flexibilización de medidas de endeudamiento, so pretexto de permitir que sus territorios se conviertan en bases operativas militares del Comando Sur.

El escudo es un plan contrainsurgente preventivo, activado para evitar levantamientos de subversión social o intentos de resistencias civiles que se opongan a las injerencias norteamericanas. De la misma manera, se convierte en el

mecanismo de regulación del fisurado sistema democrático regional, para intervenir y controlar en los procesos electorales con tal de debilitar a los partidos y movimientos sociales y populares con posibilidades de llegada al gobierno nacional. Blindar a la región dentro y fuera de cualquier presencia o alianza que amenace la hegemonía norteamericana es parte del papel de esta nueva correlación.

Colombia se convierte en un actor fundamental, su posición geográfica le sirve a los Estados Unidos como plataforma de agresión y control militar, despliegue y abastecimiento tanto de recursos naturales y de materias primas, con posibilidades de operación de amplio espectro sobre la región. Colombia por ser un país aun en conflicto armado, se ha convertido en la base principal de operaciones del Comando Sur y con ello, sirve a la Casa Blanca en el control regulatorio del negocio del narcotráfico a fin de garantizar su monopolio como principal agente inversionista del continente.

De fondo, la excusa defensiva norteamericana se basa en el monopolio de las rentas del narcotráfico, que había sido desplazada por la ola de nuevos comercios ilegales que habían logrado romper la cadena de intermediación de los agentes de la inteligencia federal, del cual se lucran poderosos sectores militares, políticos y comerciantes de EE.UU. Al final, con el control de las rutas en la región, con la permisividad operativa de los gobiernos afines y sus fuerzas militares, el negocio del narcotráfico fortalecerá la dinámica criminal con la que el capitalismo parasitario del continente ha creado sus fuerzas económicas.

No es gratuito que la actual administración de la Casa Blanca tenga como aliados principales en la región a sectores de la

clase narcopolítica y paramilitar que se han enriquecido rápidamente con negocios dentro de los Estados Unidos y luego terminen siendo los grandes dirigentes de sus estados. La relación entre narcotráfico, política y negocios privados y públicos, dan cuenta de la descomposición con la cual tanto el imperialismo norteamericano y sus aliados títeres en el continente, intentan contener el declive hegemónico en desarrollo.

Apuntes sobre el retorno de la ultraderecha colombiana al gobierno nacional

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la república de Colombia. Un advenedizo llega a la Casa de Nariño, con un plan improvisado que hasta el momento muestra rasgos aun por desarrollarse claramente, que se pueden señalar de la siguiente manera: un enfoque autoritario matizado en la idea del líder religioso carismático, creado y movido por el marketing, cuyo proyecto conservador se orienta hacia la restauración del orden bajo la creación de un régimen policivo, corporativo, privativo y regulador de los derechos sociales, económicos y políticos, asociado a una visión injerencista de la política exterior norteamericana e israelí en los asuntos nacionales.

De fondo, el proyecto de la ultraderecha se concentra en la idea de refundar un nuevo reagrupamiento de clase, dada la crisis orgánica de los sectores dominantes y dirigentes que se expresa en el sistema político de representación y toma de decisiones: hay incompatibilidad con la legitimación de la coerción esencial al sistema en su fase de reforma, con las demandas sociales que el mercado mantuvo reguladas dentro

del consenso social neoliberal de la representación y la movilidad social (crédito, capital cognitivo y humano, focalización, entre otros).

Ello se expresa en los obstáculos a los acuerdos sociales, porque son posibilidad efectiva de democratización social. La imposibilidad de refundar el sistema político, sin cambios ideológicos profundos, afectan directamente los ejercicios de hegemonía política y por ello, buscan fugas en mecanismos de representación más aceptables al consenso de las clases subalternas, dada la incapacidad de crear modos de dirección sin tener que abrir plenamente el Estado a la democratización.

Ante la urgencia de una reforma constitucional necesaria, dado que no hay posibilidad de pensar la regulación institucional sin cambios estructurales, la operación neoconservadora de la ultraderecha ha decidido trasladar la gestión política al corporativismo privado para evadir racionalmente, la emergencia de las reformas como parte del ejercicio de democratización que inició con el gobierno del cambio.

El debilitamiento de la política e ideología del uribismo como voluntad nacional en deterioro, demostró signos de agotamiento programático en su consenso interno dentro del bloque de poder gobernante y ello facilitó la fuga hacia sectores más afines hacia la restauración de una visión de clase más alineada con el carácter conservador y proteccionista de sus intereses. Pese a ello, el modelo de seguridad democrática de contrainsurgencia preventiva de masas se reinventa como una operación de contención a la incapacidad para maniobrar en la crisis.

La conflictividad social, política y cultural desborda los mecanismos de regulación pensados solo como agregación de

individuos y por ello, la política de defensa del régimen se centra en el tratamiento contrainsurgente a la protesta social y sus modos de expresión de lucha. En este sentido, es que se instala en el bloque de poder un cierre de dialogo e imposibilidad de pensar en la política de paz como un ejercicio de dirección del Estado.

Sin embargo, la deslegitimación de la clase política y del histórico pacto de guerra para garantizar la acumulación por despojo como operación de regulación del capital, demuestran modos de conciencia social variados contra el sistema político colombiano que serán difíciles de subordinar aún bajo políticas autoritarias y neoconservadoras.

Pese a los grandes anuncios de una política de mano dura y de castigo a quienes desobedezcan al régimen, los niveles de descontento social ya empiezan a advertir nuevas épocas de luchas. Ante la evidente crisis social, política y económica que empieza a madurar, el régimen cometerá errores estratégicos que avivaran nuevamente la idea de la subversión social y la puesta en escena de episodios de intensificación del descontento popular. Serán cuatro años para replantear la alternativa en medio de la resistencia activa, decidida y combativa de la gran juntanza social y popular en todos los territorios.


02

COYUNTURA

Detectar y combatir el neofascismo en el campo educativo

*Sergio de Zubiría Samper**

La extrema derecha y el neofascismo, a nivel planetario, han declarado su denominada "batalla cultural" para ganarse el "sentido común" de las poblaciones y en este trasegar consolidó un núcleo pedagógico para su "guerra y combate". El pensamiento crítico debe detectar y prevenir el fascismo en el campo educativo, para poder afrontarlo y combatirlo en todas las dimensiones sociales y culturales. Trabajar en la vía de una vida no fascista y una pedagogía antifascista. En Colombia ya se ha iniciado la polémica al develar las estrategias fascistas para desmontar la naturaleza "laica" del sistema educativo.

En los Cuadernos de la Cárcel, A. Gramsci, no utiliza el término "batalla cultural", pero ante la compleja problemática de la construcción de hegemonía utiliza categorías como "reforma cultural", "frente cultural", "movimiento cultural", "dirección cultural y moral". La extrema derecha ha puesto en circulación, supuestamente inspirados en Gramsci, el término fetiche "batalla cultural". Un significado plenamente instrumental y bélico, retomado acríticamente por las nuevas derechas, que copian de A. Lage sus tres características: la cultura no es

**Sergio De Zubiría Samper. Profesor Titular Doctorado en Bioética, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia. Presidente Fundación Walter Benjamín para la Investigación Social.*

simplemente el fin de una batalla cultural, sino también el medio; supone un conflicto cultural de cierta magnitud que desemboca en la "instanciación de lo político"; la batalla exige esfuerzos racionales para "conseguir la victoria". Los medios se transmutan en fines, el conflicto se subsume en un lenguaje bélico y la finalidad de la "batalla cultural" es la victoria. Se trata de una noción que evoca la resignificación que hizo Hitler, en Mi Lucha, del término alemán "Kulturkampf" ("lucha cultural y racial por la existencia del pueblo alemán"). Algunas manifestaciones de esta extrema derecha, para edulcorar la asociación con un lenguaje militarista, prefieren utilizar el término "contrarrevolución cultural", pero la intencionalidad es la misma.

El presente artículo pretende realizar la aproximación a una cartografía de las estrategias político-pedagógicas del neofascismo contemporáneo. Concebimos estas "estrategias político-pedagógicas", inspirados en C. Wanschelbaum, como aquellas acciones, discursos y prácticas, que van desde intervenciones político-culturales y mediáticas hasta las más elaboradas políticas educativas buscando construir un sentido común acorde a las necesidades de un orden social profundamente desigual y violento.

Postulamos que es posible hablar en clave hispanoamericana, porque existen investigaciones relevantes sobre sus manifestaciones tanto en el continente latinoamericano como en la península ibérica. Contamos con dos trabajos relativos a estos dos contextos que pueden orientar investigaciones y reflexiones futuras; exploran la realidad argentina y las circunstancias españolas en la perspectiva de la penetración en el campo educativo de las ideologías que sustentan el neofascismo.

El trabajo de E. Díez Gutiérrez "Pedagogía Antifascista" (2022) y la obra de C. Wanschelbaum "El proyecto pedagógico-político del Neofascismo" (2025). Debemos promover pesquisas que puedan detectar y confrontar la especificidad del neofascismo educativo colombiano, como también develar las instituciones, centros de investigaciones, tanques de pensamiento y colectivos que desarrollan estas tareas ideológicas. El neofascismo colombiano carece de creatividad y es una copia bastante mecánica de las recetas implantadas en otras latitudes.

Este artículo se divide en dos partes. En la primera enumeramos y describimos brevemente las "obsesiones más pregonadas" por el neofascismo pedagógico en el contexto español. En la segunda parte relatamos y describimos las "estrategias político-pedagógicas" en el contexto argentino. En esta exposición podremos identificar rasgos comunes con otras latitudes, porque estamos convencidos de la escasa originalidad de las ideologías de derecha contemporáneas y de la existencia de una internacional de esta extrema derecha que se presenta al público con el inofensivo título de "Conferencia de Acción Conservadora" (México, 2024).

Obsesiones para conquistar el "sentido común"

Para Díez Gutiérrez, la "agenda neofascista" española contiene unas "obsesiones" reiteradas, que en el fondo son los objetivos estratégicos de su "batalla cultural" o "contrarrevolución cultural". El carácter obsesivo, dogmático y prejuicioso, hacen parte constitutiva de los rasgos de la "personalidad autoritaria" analizados por los estudios de la Escuela de Frankfurt, desde la

década del cincuenta del siglo XX y coordinados por T. Adorno.Las principales "obsesiones" son: (a) Erradicar lo que denominan adoctrinamiento en la educación e implantar "su doctrina"; (b) Combatir lo que califican de "marxismo cultural" identificándolo con libertad de conciencia y expresión, los derechos humanos y el análisis crítico; (c) Desterrar el "virus" de la "ideología de género" de las escuelas; (d) Recuperar un mítico pasado de orden, por la supuesta existencia de autoridad y control, que garantizan las tradiciones culturales nacionalcatólicas. Para lograr estos objetivos estratégicos implementan siete "ejes obsesivos", cada uno con micro dispositivos bastante detallados.

El primer "eje obsesivo" es la subsunción de la acción de "educar" con "adoctrinar". Para el neofascismo actual todo lo que no es su ideología es calificado de adoctrinamiento; lo que no sea adoctrinar en su "credo" es parte de una conspiración contra su "doctrina". A su adoctrinamiento lo denominan "libertad", educación legítima en "valores tradicionales"; mientras cualquier otra forma de educación la denominan "adoctrinamiento". El neofascismo educativo español pretende restaurar en las escuelas lo que denominan "valores patrios" identificando la "patria" con el ejército y la educación con la bandera. Este eje se acompaña de dos dispositivos bastante eficaces. En primer lugar, un "pin de censura educativa" que opera sobre y para controlar la educación pública que persigue varios objetivos: acusarla de labores de adoctrinamiento; centrar el debate en la prioridad de la decisión individual que tiene el progenitor; sembrar la sospecha sobre la labor del profesorado socavando la relación de confianza entre la familia y los docentes; impulsar el miedo y la prevención dentro de profesorado que empieza a sentirse acosado y amenazado; hacer girar la agenda mediática sobre estos aspectos para ocultar los retos centrales de la educación.

En segunda instancia, consolidación de estrategias de "lawfare educativo", a través de judicializar la escuela pública vía denuncias de profesionales y centros, como también el constante acoso judicial contra los valores democráticos e inclusivos de una escuela abierta, libre y plural.

El segundo "eje obsesivo" lo conforma el acoso a la educación pública. Siembra en toda la sociedad la desconfianza sobre la educación pública. Además de objetar dizque su labor de "adoctrinamiento", el neofascismo expande la opinión que hay demasiada diversidad, excesivo pensamiento crítico, desarraigo de los valores de la "familia", falta de "vigilancia y control" sobre el profesorado. Aspiran censurar la labor y ampliar la vigilancia de los profesionales de la educación pública. Su ofensiva es contra la educación pública y los profesores de ésta, de forma paralela. Al mismo tiempo, afecta y vulnera los intereses de los menores, ya que encima de las responsabilidades de las familias, está el derecho de los niños a poder acceder a una educación integral en igualdad y libertad; entre ellos, que los niños conozcan las alternativas a los prejuicios de sus padres.

Otro eje gira en torno a la configuración de una particular "educación patriótica militar". Se configura un patrioterismo militarista que exalta unos supuestos símbolos de la "nación", marcados como símbolos de guerra y la exaltación de figuras patriarcales e hipermasculinizadas, que, en el caso español, recuperan la imagen paródica del "macho ibérico". Avalan la sentencia romana "Si vis pacem, para bellum" ("Si quieres la paz, prepara la guerra"), que evoca el programa de seguridad de Trump que entre sus principios centrales introduce el siguiente: "La paz mediante la fuerza: la fuerza es la mejor disuasión".

Se construyen enemigos de la "nación" como alteridades negativas para preparar la guerra. El mecanismo social de fabricación de alteridades negativas no es una novedad en la vida social, pero su dimensión exponencial sí lo es. La lógica neofascista actual convierte a demasiados "otros" en enemigos para odiar y liquidar: los pobres; los negros; las mujeres; los homosexuales; el mestizaje; los pensionados; los terroristas; los intelectuales; los que piensan distinto; etc. A ellos hay que enfrentarlos con esa "educación patriótica militar".

El cuarto "eje obsesivo" es una educación en la "doctrina católica". Una versión de la religiosidad que ha producido investigaciones urgentes y preocupantes. El teólogo español Juan J. Tamayo, en su libro "La Internacional del odio", analiza un sesgo "cristoneofascista" como una alianza entre el neofascismo legitimado por el capitalismo y el fundamentalismo integrista religioso, que coincide con la acelerada expansión de las iglesias evangélicas neopentecostales, con gran presencia en Latinoamérica. Existiendo ciertas coincidencias entre el evangelismo neopentecostal y el nacionalcatolicismo español. La teóloga alemana Dorothee Soell, profesora del Seminario Teológico de New York, acuña el término "cristofascismo" como constatación de una utilización instrumental de la religión para alcanzar objetivos fascistas fomentando el odio mediante discursos como las estructuras familiares binarias, la exaltación de la propiedad privada, la supremacía racial blanca, el libre mercado, el militarismo, el sexismo y la explotación de los países colonizados. La presencia de una religión exclusiva o dominante en la escuela, cualquiera que ella sea, cuestiona severamente la convivencia, la solidaridad e incrementa la segregación. La obsesión por la catequesis y los dogmas, como plantea Tamayo, promueve el fundamentalismo, androcentrismo, patriarcalismo, dogmatismo, convirtiendo el cristianismo en un "arma" contra la convivencia, la solidaridad, la diversidad y el multiculturalismo.

Un quinto eje lo conforma una tipología del "educar" en la desmemoria y la contramemoria. El dispositivo para enterrar y ocultar el pasado de forma selectiva es constitutivo de todo fascismo con el propósito de borrar de la memoria colectiva la devastación, los crímenes y genocidios producidos por el propio fascismo; configuran un pacto de silencio y desmemoria para evitar reabrir lo que denominan las "viejas heridas". Es más conveniente para su proyecto no recordar que recordar demasiado. En la situación española usan mensaje como "No al odio de otros siglos" o "No a la memoria obligatoria", combatiendo el deber de la memoria plasmado en las distintas declaraciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Esta desmemoria va acompañada de una batalla de "contramemoria histórica", para realizar una historia reaccionaria y conservadora de los sucesos históricos. Supuestamente la historia contada por las tradiciones liberales y de izquierda es adoctrinamiento y falsedad. Parte central de la cruzada educativa del neofascismo es hacer una historia a la medida de sus sesgos y prejuicios, pero también introducir temas "tabú" en la narración histórica.

Otro eje obsesivo es expandir una "educación" neomachista. Las extremas derechas neofascistas se unifican en la lucha contra los avances en la igualdad entre hombres y mujeres, en los ataques contra aquellas conquistas cruciales del movimiento feminista. Condensan su odio alrededor de un término fetichizado que es "ideología de género", que enmarca desde el ataque al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta una furia virulenta contra el feminismo. Se trata de un término que aglutina las siguientes obsesiones del neofascismo educativo: el rescate de un neomachismo "sin complejos" (recuperación del rol tradicional masculino, la agresividad, la bravuconería); el rechazo frontal de las

conquistas del feminismo; contra las leyes sobre violencia de género; contra el lenguaje inclusivo. Militan contra las leyes contra la violencia de género sosteniendo que estas formas de violencia contra el género son producto de hombres enfermos mentales, pero nada tiene que ver con la cultura patriarcal en que vivimos; también dan una batalla para la eliminación del lenguaje inclusivo, que intenta desinvisibilizar a las mujeres en la comunicación oral y escrita. El últimas, para la versión neofascista el feminismo fue una "representación fraudulenta" de las mujeres verdaderas. Como en toda educación fascista el "neomachismo" está íntimamente conectado con el racismo y la xenofobia. El fascismo se alimenta generando una división entre un "nosotros" del que ellos se sienten líderes y un "otro" peligroso que amenaza la "nación", la "estabilidad", el "orden" y la "seguridad". No existe fascismo sin un estado de alerta permanente para la confrontación de ese "otro" y "diferente".

El séptimo "eje", para Díez Gutiérrez, muy conectado con la perspectiva neoliberal, consiste en una educación basada exclusivamente en el "éxito individual". Su objetivo central busca la exaltación de la competitividad y el triunfo individual meritocrático configurando un sistema donde las víctimas son culpabilizadas por su fracaso y se exalta a los vencedores porque ellos han sido capaces de triunfar por sí mismos. En este momento se convierten en hermanos gemelos el capitalismo y el neofascismo. Sus micro dispositivos son múltiples y son determinantes en la supervivencia del neofascismo. Algunos de ellos son los siguientes: pedagogía del egoísmo; ideología del esfuerzo; lo que importa es el talento; educación "meritocrática"; el cambio está en el interior. Esta pedagogía meritocrática genera una "moral de soberbia" o "superioridad moral" en los triunfadores y una "moral de resentimiento" en los que son etiquetados como perdedores;

para el neofascismo es funcional e indispensable producir subjetividades poco empáticas, competitivas y crueles. "Este modelo corroe el carácter, nos educa en el egoísmo y la insolidaridad radical. Es más, la ideología del éxito, de la persona "que no debe a nadie", genera la desconfianza, incluso el resentimiento o el odio hacia los pobres, que son perezosos, hacia los viejos que son improductivos y una carga, hacia los inmigrantes, que quitan el trabajo, o hacia quienes fracasan en la escuela, que quitan el tiempo y atención del profesorado". (Díez Gutiérrez, 2022)

El Proyecto Pedagógico Neofascista en la región

Le educadora argentina C. Wanschelbaum ha investigado estrategias comunes en países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, para consolidar la "batalla cultural" del neofascismo hacia la construcción de hegemonía en nuestro continente. A partir de la recopilación de información empírica, análisis y codificación, logra sistematizar siete estrategias que se replican en los gobiernos de extrema derecha: (a) Una pedagogía de las fuerzas del cielo; (b) La pedagogía del shock; (c) Una pedagogía anticomunista; (d) Una pedagogía de guerra contra la educación pública; (e) Una pedagogía de la conspiración; (f) Una pedagogía del antimonopolio del Estado en la educación y por la libertad de enseñanza; (g) Una pedagogía de las fuerzas del mercado. La investigadora subraya una focalización en el análisis de Milei, porque considera que se ha convertido en un referente principal del neofascismo latinoamericano.

Una estrategia clave en los triunfos electorales y en el sostenimiento de las gestiones gubernamentales es la construcción de una narrativa basada en un discurso místico-religioso. La estrategia se desglosa en cinco puntos: un liderazgo mesiánico; actos de dios; el sujeto político-pedagógico; los y las jóvenes; cultura antidemocrática. El líder es un "elegido" con una misión divina y con cualidades excepcionales para esta misión; la religión se convierte en la función instrumental de legitimación de esa "misión". Estos líderes mesiánicos combinan judaísmo, catolicismo y evangelismo; adoptan el lema "Dios, patria y familia". Se articulan explicaciones y soluciones místicas a los distintos malestares sociales; así se tiende a desplazar la responsabilidad hacia abstracciones permitiendo que las elites que detentan el poder evadan las críticas y mantengan el orden establecido como "actos de Dios". El objetivo es formar sujetos políticos inmersos en infodemia, odio y miedo. Priorizan esas tareas hacia los y las jóvenes. Un objetivo central del neofascismo es generar una cultura antidemocrática desde abajo para lograr a mediano plazo legitimar formas antidemocráticas de poder desde arriba.

La pedagogía del shock consiste en generar un estado de ánimo de alarma social para instaurar un estado de malestar, desorden e inseguridad, para imponer unos cambios irreversibles e intempestivos. Como analiza N. Klein, se trata de una "doctrina" que instrumentaliza el ejercicio del poder del trauma para actuar contra los intereses de las grandes mayorías. Pretende avanzar en un consenso social para aplicar un temible tratamiento. Los shocks a gran escala conducen a regresiones masivas y crean las condiciones de posibilidad para que las personas se conviertan en presas fácil de los "demagogos". Un clima de alarma social propende a ser presa fácil de la represión y el autoritarismo.

En el contexto norteamericano y latinoamericano germina una pedagogía anticomunista. El neofascismo nativo identifica su lucha contra el comunismo con cualquier alternativa socialista, marxista, progresista o izquierdista. Dos aspectos de esa lucha anticomunista llaman la atención: en primer lugar, según su perspectiva, esas alternativas son un fracaso planetario, un absoluto desengaño; en segunda instancia, en su lucha cultural, consideran, que esas alternativas han triunfado. Una especie de ambivalencia, pero que rememora, la característica de U. Eco, de mostrar a los enemigos, al mismo tiempo, como débiles y fuertes. El antisemitismo del fascismo histórico es un medio de unificación autoritario de todas las fuerzas fascistas. Por ejemplo, Milei, en sus entrevistas simplificadoras sobre A. Gramsci, lo condena, pero dice utilizarlo como herramienta para su "batalla cultural". Plantea dizque seguir los lineamientos de Gramsci para meterse en la cultura, la educación y la comunicación.

Utilizan una pedagogía de "guerra" contra la educación pública que se ha convertido en obsesión y causa principal de sus luchas. Acuñan el termino de "guerra" porque el desmantelamiento de la educación pública es el trofeo mayor de la "batalla cultural". Partiendo de una amalgama contradictoria de fundamentos del neoliberalismo, anarcocapitalismo, neoconservadurismo y amañadas interpretaciones del catolicismo, levantan el estandarte de esa "guerra" contra la educación pública. Aplicando la "doctrina del shock" expanden una narrativa de tragedia, catástrofe y colapso, de la educación pública a cargo del Estado, Un ataque sistemático y continuo contra la educación pública que tiene las más variadas y perversas tácticas: estrangulamiento financiero: desconfianza con la actividad docente; manipulación de los resultados de las pruebas internacionales;

la supuesta mediocridad e ineficiencia de sus resultados; privatización velada o directa; entre muchas otras.

En la base se encuentra una pedagogía de la conspiración que pretende reiterar que existe un modelo educativo público que adoctrina y se ha tomado las escuelas y las universidades. Aquellas instituciones inculcan exclusivamente contenidos de izquierda, feminismo, ideología de género y lenguaje inclusivo. Buscan convencer de que en la educación pública no existe "libertad de expresión" y los discentes son manipulados por ideologías de izquierdas, comunistas y progresistas. Se trata de una conspiración del comunismo internacional. Principalmente, las universidades son bastiones del "enemigo" y por tanto debemos promover el miedo y odio contra todo aquello que impugne los verdaderos valores conservadores. Repiten que el "adoctrinamiento" proviene de las ideologías de izquierda, presentando las políticas y acciones de los gobiernos de ultraderecha como neutrales y sin contenido ideológico. En el fondo pregonan una escuela sin ideología buscando una educación que adoctrine solo en su propia ideología, porque consideran que es la única ideología válida y legitima.

Otra de las estrategias consiste en reeditar debates históricos sobre el papel del Estado y la familia en la dimensión educativa. Se presenta al Estado como el principal responsable de la crisis de la educación, dentro de su propósito de transformar de raíz el sistema educativo público; solo aceptarían un papel subsidiario del Estado, pero en ningún momento una función protagónica en el sistema educativo. Desde su perspectiva no es posible dejar la orientación de la educación en manos de sus "enemigos". No excluyen totalmente al Estado, como en toda tradición neoliberal, pero debe reconfigurarse su responsabilidad y modos de intervención en el campo

educativo. Las familias y los padres deben tener un papel central en el proceso pedagógico. La extrema derecha y el neofascismo se unifican en el antimonopolio estatal de la educación; para ellos, esa es la garantía de lo que denominan "libertad" en la educación. Aborrecen cualquier significado que asocie la educación a gratuidad, laica, pública y bien común.

Por último, el proyecto político-pedagógico del neofascismo, propende por ampliar un consenso del sentido común para la liberalización, mercantilización y privatización de la educación. Establece una interdependencia entre la "fuerzas del mercado" y la supuesta garantía de la libre elección educativa: un sofisma que postula como entre más regulación realice el mercado mayor "libertad educativa" existiría. La estrategia para depositar la educación en las "fuerzas del mercado" se despliega a través de las siguientes acciones: la educación pública experimenta un colapso generalizado; lo que no consigue resultados eficientes debe ser desfinanciado; implementar una descentralización funcional; fomentar la participación privada; y, prácticas políticas educativas de focalización.

Los esfuerzos anteriores de producción investigativa hispanoamericana orientan un diagnóstico de ejes obsesivos y estrategias del proyecto educativo neofascista. Colaboran para realizar investigaciones sobre sus manifestaciones y coordenadas específicas en las dimensiones nacionales y regionales. El pensamiento crítico debe detectar y prevenir el fascismo en el campo educativo, para poder afrontarlo y combatirlo en todas las dimensiones educativas y culturales.

Referencias

Díez-Gutiérrez, E. (2022). Pedagogía antifascista: Construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia. Octaedro.

Gramsci, A. (2023). Cuadernos de la cárcel (A. J. Antón Fernández & A. Garrido, Eds.; A. J. Antón Fernández, Trad.). Akal

Laje Arrigoni, A. (2022). La batalla cultural: Reflexiones críticas para una nueva derecha. HarperCollins México.

Wanschelbaum, C. (2026). El proyecto político-pedagógico del neofascismo. CALAS; Universidad de Guadalajara.



03

COYUNTURA

La derecha en el gobierno, la hegemonía en disputa

*Por Fabricio Muñoz**

«Ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional.»

Gabriel García Márquez, Los funerales de la Mamá Grande.

El triunfo de Abelardo de la Espriella abre una nueva etapa política cuya importancia reside en la recomposición del bloque dominante y en la forma renovada que adquiere la presencia de la derecha en el Estado. Su inserción en las estructuras del poder colombiano antecede a la elección, de modo que lo que requiere explicación es cómo, después del ciclo abierto por el progresismo, esas fuerzas reorganizaron su representación hasta encontrar una expresión capaz de disputar nuevamente la dirección del país. La elección condensa desplazamientos acumulados y abre una nueva fase del proceso hegemónico, en la que las fuerzas dominantes buscan recuperar capacidad de dirección mientras las fuerzas subalternas enfrentan el desafío de convertir sus capacidades de resistencia en una alternativa de alcance nacional.

---

*Sociólogo, investigador y analista político de la Corporación Crisallida. Además, se desempeña como escritor y colaborador permanente en el portal rebelión.org

Este proceso puede leerse desde una crisis de hegemonía, entendida como el debilitamiento de las formas mediante las cuales una dirección consigue articular intereses diversos y presentarlos como orientación general de la sociedad. En Colombia, donde coerción y hegemonía han convivido históricamente, la crisis expresa una alteración de las relaciones de fuerza que hace necesario reconstruir esa capacidad de dirección. Llamaremos recomposición hegemónica al movimiento mediante el cual las fuerzas de derecha buscan reorganizar el bloque de poder y dotar al orden social de una nueva legitimidad. El gobierno constituye una posición decisiva dentro de esta tentativa, pero su resultado permanece abierto. El análisis seguirá este proceso desde la recomposición del bloque y las formas renovadas de representación de la derecha, pasando por la producción de un nuevo sentido común alrededor del orden, hasta llegar al territorio como espacio donde la hegemonía encuentra sus posibilidades y sus límites.

Entre la continuidad del bloque y la renovación de la derecha

La novedad de la derecha actual reside en las formas mediante las cuales busca reorganizar estructuras de poder que la preceden. La historia del bloque de poder colombiano muestra que las crisis pueden modificar alianzas, liderazgos y mecanismos de dirección sin alterar las relaciones sociales que sostienen el poder. El Frente Nacional constituye un ejemplo de esta capacidad de recomposición, al contener contradicciones entre las fracciones dominantes mediante una fórmula política que aseguró el control estatal y presentó el orden como garantía de estabilidad. El bloque de poder puede

entenderse así como una forma de dirección capaz de articular intereses diversos bajo una orientación que consiga presentarse como interés nacional.

El ciclo abierto por el gobierno Petro modificó ese campo de fuerzas al colocar en el centro de la disputa la paz, la tierra, la desigualdad, la transición energética y el papel del Estado, mientras la reacción conservadora encontró en la nueva derecha una forma política renovada. Su representación combina liderazgo personalista, comunicación directa, reivindicación de la autoridad, securitización de la vida pública y conflictos culturales, produciendo procesos identitarios que desbordan las pertenencias políticas y las posiciones económicas tradicionales. Su particularidad reside, en buena medida, en poder presentarse como ruptura con las élites políticas mientras conserva vínculos con las estructuras económicas, institucionales y territoriales que sostienen el bloque de poder.

Los primeros movimientos del nuevo gobierno muestran que esta recomposición permanece abierta. La presencia de figuras provenientes del conservadurismo, el empresariado y espacios técnicos, junto con la distancia respecto de sectores centrales del uribismo tradicional, expresa la búsqueda de una identidad propia dentro de las derechas. El acercamiento a sectores regionales y el acto de posesión en Cali sugieren también una disputa por las bases territoriales desde las cuales se organiza el poder. La dirección presidencial no elimina, sin embargo, las contradicciones entre fracciones económicas, sectores políticos, élites regionales y corrientes ideológicas. Allí se juega una parte central de la recomposición hegemónica, en la capacidad de ordenar esas diferencias bajo una dirección común.

El transformismo permite precisar este movimiento. Se trata de una modalidad de recomposición en la que demandas, actores y lenguajes susceptibles de alimentar una alternativa diferente son incorporados a una dirección que conserva las relaciones fundamentales del orden. La novedad política puede convivir así con una continuidad social profunda, pues la renovación de los lenguajes y de las formas de representación puede acompañar la reconstrucción de vínculos con sectores que han ocupado posiciones centrales en el Estado durante décadas. La crisis de hegemonía mantiene abierto este proceso porque ninguna fuerza posee de antemano la capacidad de convertir su proyecto particular en dirección general. El control del Estado constituye una posición de fuerza, pero la hegemonía exige convertirla en capacidad de dirección y sostenerla frente a las contradicciones de la propia recomposición.

De la crisis del orden a la fabricación de un nuevo sentido común

Para que la recomposición del bloque pueda convertirse en hegemonía necesita producir una concepción del mundo capaz de articular experiencias distintas y presentar una respuesta particular a la crisis como orientación general de la sociedad. Allí se configura una gramática del orden en la que seguridad, autoridad, mérito, empresa, propiedad, patria y conservadurismo moral pueden funcionar como dimensiones de una misma concepción social. La hegemonía supone que determinados intereses, valores y prácticas se incorporen al sentido común desde el cual sectores diversos interpretan su propia experiencia. La disputa hegemónica alcanza así las categorías que organizan esa interpretación.

Dentro de esta articulación, la seguridad ocupa un lugar privilegiado porque permite reunir demandas distintas bajo una misma promesa de estabilidad. Seguridad para circular, producir, invertir, proteger la propiedad, controlar fronteras o recuperar territorios considerados fuera del control estatal. Se configura una racionalidad en la que el orden comienza a presentarse como condición del crecimiento, mientras la seguridad aparece como garantía de inversión, estabilidad y autoridad estatal. El Estado permanece como actor central, aunque reorienta sus prioridades hacia la seguridad, la vigilancia, la infraestructura estratégica y la protección de las condiciones de acumulación.

La política de Paz Total del gobierno Petro expresa de manera particularmente clara esta tensión. La apertura de negociaciones con distintas expresiones armadas buscó modificar la relación entre Estado y conflicto, pero su desarrollo estuvo atravesado por políticas y lógicas contrainsurgentes que coexistieron con los mecanismos de negociación, mientras en distintos territorios persistían confrontaciones, desplazamientos, disputas por el control territorial y la expansión de economías alternativas. Crisis como la de Catatumbo y el Cauca condensaron esas contradicciones y contribuyeron a instalar la percepción de que el Estado perdía capacidad para garantizar seguridad y control, creando las condiciones para que la derecha reorganizara el sentido de la crisis alrededor de la autoridad y la recuperación del control territorial. El conflicto pasó así a ser leído menos desde las condiciones históricas que lo producen y más desde la necesidad de restablecer el orden.

Este desplazamiento modifica el horizonte de las soluciones. Cuando la guerra se interpreta principalmente como un

problema producido por determinados actores armados, la estructura agraria, la desigualdad regional, la concentración de la tierra, las economías ilegales y la exclusión política pierden centralidad en su explicación. La contradicción histórica se convierte en problema de seguridad y la transformación social cede espacio a la gestión del orden. Las causas materiales permanecen, pero cambia el marco desde el cual son interpretadas, permitiendo que la violencia funcione simultáneamente como experiencia social y como fuente de legitimidad para una determinada concepción del Estado.

La misma articulación aparece entre mercado, mérito y moral. La iniciativa privada, la eficiencia estatal y la responsabilidad individual pueden encontrarse con una concepción conservadora de la familia, la nación y la autoridad, produciendo una representación en la que la seguridad ofrece protección, el mercado prosperidad, el mérito explica las diferencias sociales y la moral responde a la percepción de desorden. Ninguno de estos elementos es nuevo por separado. Su fuerza reside en la articulación y en la capacidad de convertirlos en una interpretación general del momento histórico, operación en la que la política electoral incorpora símbolos, emociones e imágenes capaces de condensar en el liderazgo una promesa de restauración del orden.

La recomposición hegemónica requiere, de este modo, articular experiencias e intereses diversos alrededor de categorías capaces de producir un horizonte común. Trabajadores, empresarios, habitantes rurales y ciudadanos urbanos pueden reconocer en la seguridad, la autoridad, el mérito o la patria respuestas plausibles a sus incertidumbres sin compartir un mismo proyecto económico. Cuando una interpretación consigue organizar experiencias heterogéneas,

deja de ser sólo una posición política y comienza a convertirse en sentido común. Allí la disputa por la hegemonía desborda al gobierno y se proyecta sobre la sociedad.

El territorio como campo de disputa hegemónica

La noción de territorio permite ampliar esta disputa. En Zibechi , el territorio es una construcción social en la que los sujetos organizan la vida, el trabajo, la educación, la producción, las relaciones comunitarias y las formas de decisión. La disputa política adquiere así una dimensión que desborda al Estado y la competencia partidaria, pues también se libra allí donde las clases populares reproducen su existencia, construyen vínculos y desarrollan capacidades de autonomía. El territorio puede constituirse como espacio de resistencia y como lugar de producción de relaciones sociales que no dependen por completo de las instituciones dominantes.

Desde esta perspectiva, la hegemonía adquiere una dimensión material. Seguridad, mercado y Estado adoptan en el territorio formas concretas de presencia militar, infraestructura, acceso a la tierra, empleo, servicios públicos y regulación de conflictos, mientras la autonomía adquiere contenido cuando una comunidad organiza colectivamente parte de las condiciones de su reproducción. La disputa territorial remite, por tanto, a las relaciones sociales que se establecen en esos espacios y a las formas de poder capaces de organizarlas.

Esta dimensión resulta decisiva en Colombia, donde los territorios condensan relaciones económicas, políticas y

culturales atravesadas por corredores estratégicos, economías alternativas, concentración de la tierra, extracción de recursos, fronteras e infraestructura. Las transformaciones del capitalismo han producido nuevas espacialidades económicas y procesos de acumulación por desposesión en los que desplazamiento, concentración territorial, privatización y violencia se articulan de formas concretas. El conflicto armado aparece así integrado a las relaciones sociales, las dinámicas territoriales y las formas de acumulación configuradas en distintas regiones del país.

La disputa hegemónica adquiere allí una forma concreta. El Estado y el capital buscan organizar los territorios mediante seguridad, mercado, infraestructura, regulación y nuevas formas de inserción económica, mientras comunidades indígenas, campesinas, populares y urbanas pueden construir otras formas de organización y reproducción de la vida. Existen así capacidades políticas construidas fuera de los centros institucionales del Estado que pueden adquirir una dimensión contrahegemónica cuando articulan reivindicaciones particulares con una interpretación más amplia de la sociedad, sin que toda experiencia comunitaria deba considerarse emancipadora.

El problema histórico del campo popular ha sido también la dificultad para convertir experiencias diversas de organización en una dirección común. Las luchas campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y territoriales han producido capacidades de impugnación, aunque la fragmentación política, las contradicciones internas y la violencia han dificultado su articulación. Esa capacidad persiste en organizaciones indígenas, sindicatos, colectivos juveniles, movimientos ambientales y organizaciones territoriales, por lo

que la derrota electoral no equivale a un colapso de las capacidades organizativas del campo popular. El desafío consiste en articular esa diversidad, construir una interpretación común de la crisis y disputar dirección política, cultural y territorial.

La disputa se define, entonces, por la capacidad de la nueva derecha para reorganizar las relaciones de poder en los territorios y por la posibilidad de que las fuerzas populares disputen allí la dirección de la sociedad. Una hegemonía requiere algo más que el control institucional, del mismo modo que una contrahegemonía necesita superar la resistencia aislada. La derecha debe convertir su posición estatal en capacidad de dirección y consentimiento; las fuerzas populares, sus capacidades territoriales y organizativas en un proyecto capaz de vincular experiencias particulares con un horizonte general. El territorio resulta decisivo porque allí orden, seguridad, mercado, autonomía y justicia adquieren forma concreta.

Gobernar tampoco equivale a dirigir. La nueva derecha puede disponer del Estado y de importantes posiciones de fuerza sin haber construido una hegemonía estable, mientras las fuerzas populares pueden carecer del gobierno nacional y conservar capacidades de organización y dirección en espacios sociales concretos. Ninguna posición es suficiente por sí misma. El gobierno debe convertirse en dirección social, la resistencia en proyecto y la presencia territorial en una estrategia capaz de articular escalas y sujetos diferentes. La disputa por el sentido común exige, además, producir otra manera de interpretar y organizar la vida colectiva.

La recomposición hegemónica de la derecha constituye, por tanto, una tentativa dentro de una crisis de hegemonía todavía abierta. Su desenlace dependerá de su capacidad para transformar el poder institucional en dirección social, estabilizar las contradicciones del bloque y convertir seguridad, autoridad y orden en principios capaces de organizar un nuevo sentido común. También dependerá de lo que ocurra fuera del Estado, allí donde organizaciones y territorios disputan las formas de reproducción de la vida. Las fuerzas populares no parten de cero, aunque la existencia de organización tampoco constituye por sí misma una alternativa hegemónica. Necesitan articular esas experiencias en una concepción de sociedad capaz de disputar dirección. La nueva etapa colombiana se abre, así, en medio de una disputa por la construcción de la hegemonía cuyo terreno comprende el Estado, la sociedad civil, el sentido común y los territorios.

Referencias

BAUTISTA BAUTISTA, *Sandra Carolina. «Hegemonía y crisis de hegemonía en Colombia. Debate abierto sobre la historia». De Raíz Diversa, núm. 15, 2021, pp. 91-116.*

FROSINI, *Fabio. «¿Qué es la crisis de hegemonía?». Revista de Filosofía, vol. 43, 2018.*

GRAMSCI, *Antonio. Cuadernos de la cárcel. Edición crítica de Valentino Gerratana. México, Ediciones Era, 1981-1986.*

HARVEY, *David. El nuevo imperialismo. Madrid, Akal, 2004.*

PARDO MONTENEGRO, *Liliana. Las crisis y los procesos de conformación del Bloque Hegemónico Colombiano, 1930-1950. TeseoPress, 2024.*

PORTELLI, *Hugues. Gramsci y el bloque histórico. México, Siglo XXI Editores, 1990.*

ZIBECHI, *Raúl. Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Buenos Aires, Lavaca Editora, 2008.*



04

COYUNTURA

Después del progresismo

Colombia ante la economía libertaria, la radicalización conservadora y la reconversión del Estado

*Por Giovanni Libreros**

> *Estamos en la época de las masas: éstas se prosternan ante todo lo masivo. Y eso ocurre también in politicis [en los asuntos políticos]*
> **F. Nietzsche.**

Escritas en el ocaso del siglo XIX, estas palabras resuenan con inquietante actualidad en la convulsa infancia del XXI. En este interregno, la política parece subordinar el logos al pathos cuya producción calculada de adhesiones convierte la fuerza, el espectáculo y la simplificación en fuentes de legitimidad. Allí donde retrocede la deliberación avanza la exaltación del liderazgo personal, la promesa de orden y la fabricación de enemigos, movilizando el espíritu de cuerpo hasta reducir la expectativa de cambio a una manipulación del resentimiento, el miedo y la obediencia.

**Filósofo, investigador y analista de conflictos sociales de la Corporación Crisállida.*

En este incierto panorama, la retórica de ruptura reorganiza, en realidad, los grandes intereses privados. Bajo la promesa de libertad, se debilita la capacidad redistributiva de la administración pública mientras se fortalecen sus funciones de coordinación estratégica y protección del sistema financiero. Justamente en esta tensión, entre repliegue social y reforzamiento del aparato gubernamental, situamos la "dinámica libertaria" del nuevo régimen, concepto que proponemos como base para un diálogo crítico sobre las reconfiguraciones actuales.

Se trata, apenas, de una primera aproximación exploratoria, por lo que no pretendemos clausurar su caracterización, sino más bien abrir un espacio de contraste e intercambio que permita precisar colectivamente el alcance de las transformaciones en curso.

A modo de hipótesis, proponemos una lectura a través de tres desplazamientos convergentes: el recorte de las funciones sociales y redistributivas, la simplificación tributaria favorable a los grandes capitales y la apertura de nuevos espacios de inversión mediante la reactivación extractiva. Este repliegue del asistencialismo, sin embargo, no supone una pérdida general de capacidad pública, sino su reconducción; mientras se debilitan los mecanismos de protección social, se expanden los dispositivos securitarios, tecnológicos y territoriales destinados a asegurar mercados, infraestructuras y flujos de acumulación.

No se perfila, entonces, una retirada uniforme de los subsidios y mecanismos proteccionistas, sino su reconversión selectiva; se debilitan las funciones que garantizan derechos y redistribuyen recursos, mientras se refuerzan las destinadas a

proteger inversiones, regular poblaciones y asegurar infraestructuras estratégicas. En esa asimetría —menos protección social y mayor capacidad de mando— reside una clave de la economía política emergente.

Este escrito examina, en clave exploratoria, la racionalidad de la gobernanza que emerge y sus efectos previsibles. Por tanto, la pregunta que guía esta reflexión puede sintetizarse así: ¿cómo se articulan liberalización económica, securitización y expansión extractiva, y qué consecuencias puede tener esa convergencia sobre la paz, los derechos y la conflictividad social?

Nuestra hipótesis sostiene que la administración entrante no reduce simplemente la intervención oficial, sino que redistribuye sus capacidades. En otras palabras, no estamos ante una simple reversión de las "reformas progresistas", sino frente a una reconfiguración más profunda del sistema político que se traduce en una gestión tecnológica del conflicto y su vínculo con la expansión de las infraestructuras digitales sobre las que operan las grandes compañías informáticas con el propósito de consolidar el capitalismo de plataforma.

Por consiguiente, este análisis se organiza en dos momentos. El primero examina cómo el Estado se acopla a la alianza entre economía libertaria, tecnonacionalismo y capitalismo de plataformas en medio de un proceso de radicalización conservadora. En el segundo apartado se analiza cómo la gestión orientada a la valorización lleva de la mano la expansión extractiva con el debilitamiento de la paz, la seguridad y la restricción de derechos sociales y territoriales.

La reconversión selectiva del Estado

Este remodelamiento de la política se inscribe en una matriz reaccionaria. Según Strobl (2022), el conservadurismo actúa como una disposición antirrevolucionaria que protege la propiedad, la disciplina y las desigualdades; no busca superar la injusticia, sino administrarla y preservar el orden existente.

Esta distinción separa el conservadurismo del fascismo: mientras el primero busca preservar jerarquías, el segundo aspira a regenerar la sociedad mediante un pasado mitificado y la fabricación de enemigos internos y externos cuya eliminación o sometimiento se presenta como condición para restaurar el orden. No obstante, el término neofascismo aporta un valor analítico ante la radicalización conservadora que erosiona la democracia desde dentro, permitiendo identificar mutaciones autoritarias contemporáneas sin exigir una reproducción literal de sus formas clásicas, como lo veremos más adelante.

Ahora bien, esta distinción evita reducir el fascismo a una etiqueta aplicable a toda derecha extrema. Más que equiparar al nuevo gobierno con los fascismos históricos, interesa observar cómo ciertos rasgos conservadores pueden exacerbarse hasta impulsar una reorganización autoritaria, especialmente en nuestro caso, tras el cierre del ciclo político del petrismo.

Visto en un contexto más amplio, esta deriva adquiere especial nitidez con el tecnonacionalismo securitario formulado por Alexander C. Karp y Nicholas W. Zamiska (2025) y expuesto en La República Tecnológica. Allí, la innovación deja de concebirse solo como progreso económico y pasa a operar como

infraestructura de soberanía y "poder duro", articulada con la defensa, la inteligencia, la vigilancia y los sistemas autónomos de armamento.

De modo que, lo arcaico y lo hipermoderno convergen en la recomposición de una élite patriarcal, masculina, blanca y burguesa que prolonga sus privilegios mediante tecnologías avanzadas con gran capacidad de despliegue biopolítico. De ahí que Karp y Zamiska conciban el "siglo del software" como soporte de la primacía occidental, integrando inteligencia artificial, guerras hibridas, frentes invisibles, guerra cognitiva y dispositivos militares de última generación.

Actualmente, el nacionalismo y la autoridad se están consolidando mediante las infraestructuras de datos y un entramado que vincula la arquitectura corporativa con la identificación de nuevas amenazas. En este escenario disruptivo, la nueva derecha amalgama la tradición religiosa con el espectáculo y la innovación digital.

No estamos, por tanto, ante un conservadurismo neoliberal, sino ante una derecha con pretensión fundacional. Si el "consenso de Silicon Valley" descrito por Durand (2021) subordinó la política a la innovación, la flexibilidad y la expansión empresarial, Karp y Zamiska prolongan esa lógica hacia el terreno militar. El resultado no contrapone mercado y Estado, sino que los articula selectivamente mediante privilegios para el gran capital y mayores capacidades gubernamentales de defensa, hipervigilancia y competencia geopolítica.

Ocurre, por otra parte, que esta mutación se profundiza con el "capitalismo de plataformas". Como advierte Srnicek (2018),

la economía digital atraviesa múltiples sectores y convierte los datos en un recurso estratégico de extracción y concentración. A ello se suma lo que Sadin (2018) denomina como la "silicolonización", es decir, la expansión global de una racionalidad que privatiza la comunicación mientras capitaliza la información y transforma algoritmos, redes y la big data en instrumentos de gobierno sobre las conductas y subjetividades.

Desde esta perspectiva, la nueva derecha, por lo menos en nuestro medio, no representa una simple restauración plutocrática tras el ciclo progresista, sino una recomposición que articula estratificación social, libertarismo económico y poder tecnocorporativo. El uribismo, decisivo en la consolidación del orden securitario y la desarticulación de tejidos insurgentes, aparece ahora como una referencia insuficiente.

Más que romper con ese legado, el bloque emergente busca actualizarlo; en términos precisos, pretende transitar de la contrainsurgencia clásica y su "variante progresista" hacia un Estado tecnificado capaz de asegurar mercados, infraestructuras y territorios mediante una progresiva "ucranización" de las operaciones de seguridad, entendida como la incorporación de drones, sistemas autónomos, inteligencia en tiempo real y tecnologías de vigilancia propias de los conflictos contemporáneos de alta intensidad.

Bajo esta premisa, dicho proyecto se configura no como un fascismo consumado, sino como una radicalización conservadora que integra la liberalización económica, la gestión corporativa y el desarrollo tecnológico. Pero, al mismo tiempo, hay que advertir que esta corriente busca profundizar la dominación de clase, género y raza, consolidar alianzas

estratégicas entre el Estado, las instituciones religiosas y el gran capital, y centralizar la autoridad en liderazgos con limitados contrapesos democráticos.

Desde esta perspectiva, y en diálogo con Marín Castrillón (2026), resulta más preciso hablar de la articulación de rasgos fascistas en las esferas ideológica, político-jurídica y económica, en lugar de declarar la consolidación plena de un régimen protofascista. No obstante, esta prudencia analítica no debe hacernos prescindir de la categoría de neofascismo; por el contrario, tal como sugiere De Zubiría (2026), su valor radica en identificar las continuidades históricas sin caer en el error de equiparar las dinámicas actuales con una réplica mecánica de los fascismos clásicos.

El prefijo "neo" denota una mutación, no la caída inmediata de la democracia, sino una fascistización interna que erosiona libertades y contrapesos mientras refuerza asimetrías y autoritarismo. Así, el neofascismo identifica tendencias de reorganización autoritaria en desarrollo, diferenciando estas fuerzas de la derecha convencional al señalar sus fases de ascenso y consolidación institucional.

En correspondencia, la fascistización adquiere una expresión concreta en el programa económico. Se manifiesta mediante una "economía libertaria" que retrae las funciones sociales del Estado para priorizar el orden, la propiedad y concentración de riqueza. Así, la apertura al extractivismo y la desregulación sectorial consolidan una deriva autoritaria que actúa como el correlato político necesario de este modelo (ORZA, 2026).

En lo inmediato, esta orientación combina disciplina fiscal, simplificación tributaria, reducción burocrática, venta de

activos y reactivación petrolera y gasífera (Defensores de la Patria, 2026d).

Bajo el argumento de estimular la inversión, estas medidas rediseñan selectivamente la acción pública, restringiendo funciones correctivas mientras preservan aquellas que garantizan rentabilidad a las inversiones. Así, la "seguridad jurídica" puede traducirse en menor protección social, mayor desigualdad y menor contención de los abusos del mercado.

En definitiva, no enfrentamos una mera fragilidad institucional, sino una crisis profunda del horizonte emancipador que ha abierto espacio a las expresiones más retrógradas y autoritarias de la política. Su avance se produce desde el interior mismo de la democracia liberal, erosionando los ya frágiles valores laicos, estrechando los márgenes del pensamiento crítico y demostrando que los derechos pueden degradarse progresivamente sin necesidad de suprimir formalmente las elecciones.

Gobernar para valorizar

Entender esta lógica general del nuevo gobierno requirió partir de la hipótesis de una reorientación selectiva del Estado. No obstante, el alcance de esta estrategia se torna evidente al observar cómo dicha racionalidad permea las políticas sectoriales; lejos de ser una simple reducción uniforme del intervencionismo estatal, asistimos a una reconfiguración de derechos, servicios y bienes colectivos, los cuales quedan progresivamente supeditados a criterios de eficiencia, valorización e inversión privada.

Tal mecanismo termina por someter la acción pública a los estrictos criterios de rentabilidad. Ciertamente, en salud, se privilegian alianzas público-privadas; en cultura, la mercantilización de activos; y en educación, la formación técnica junto a preceptos confesionales. Este patrón sistematiza la subordinación de los derechos colectivos, articulando una «guerra cultural» que, bajo el velo de una contrarreforma espiritual, asegura las condiciones estructurales para la valorización del capital.

Sin embargo, la viabilidad fiscal de esta escalofriante promesa resulta cuestionable. Otero Prada (2026) advierte que los ahorros estatales no bastarán para cubrir simultáneamente los recortes tributarios, el gasto en seguridad y la reducción del déficit, ni los ingresos por regalías llegarán a tiempo. Más allá de las cifras, el supuesto "milagro" fiscal exige desplazar los costos del ajuste hacia la sociedad, convirtiendo la verdadera encrucijada en determinar quiénes y cómo los absorberán.

Adicionalmente, este problemático rumbo se extiende localmente mediante los planes regionales en el Caribe, el Valle del Cauca y el Pacífico que priorizan la logística, la infraestructura y el comercio exterior sobre las necesidades locales (Defensores de la Patria, 2026f, 2026g). Al definir el valor regional exclusivamente por su capacidad de captar capital, se subordinan las demandas de tierra, agua y autonomía de las comunidades campesinas y étnicas a imperativos de competitividad, intensificando así la tensión entre la valorización económica y los derechos territoriales.

A esta exclusión, se suma una dimensión crítica referida a la débil integración de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes como sujetos políticos, lo cual restringe

su participación efectiva. Pese a reconocimientos formales en documentos sectoriales (Defensores de la Patria, 2026e), persiste una brecha entre la retórica y la capacidad real de decidir sobre sus territorios. En consecuencia, se consolida una economía política que prioriza la rentabilidad privada sobre la autonomía comunitaria, trasladando a estos grupos el costo de la disputa por su permanencia material.

En este marco, la seguridad deja de ser una esfera independiente de las finanzas y se integra plenamente en la arquitectura de gobierno. La militarización territorial, la protección de activos considerados como esenciales y la gestión de las poblaciones se transforman en fríos cálculos destinados a reducir incertidumbres, contener protestas y, en última instancia, blindar los circuitos de inversión frente a las demandas de las comunidades excluidas.

Más allá de un complemento, la seguridad se erige como una condición de posibilidad del programa económico. La estrategia oficial —que incluye planes de choque, militarización y alianzas internacionales (Defensores de la Patria, 2026c)— busca recuperar el control territorial para blindar la inversión y el comercio, como evidencia el plan para el Valle del Cauca (Defensores de la Patria, 2026g). Así, la coercividad estatal se reconfigura no solo para gestionar el orden, sino para garantizar las condiciones necesarias para la expropiación de los bienes comunes.

Aunque esta orientación no supone una ruptura absoluta —pues el orden securitario también se mantuvo y adaptó durante el periodo progresista—, sus nuevas manifestaciones impactan profundamente la ya debilitada política de paz. Esta transición hacia un paradigma punitivo resulta instrumental para gestionar

las tensiones derivadas de la contracción económica. Al reducir el Acuerdo de Paz de 2016 a una mera gestión del crimen por la fuerza, el Estado consolida un mecanismo de disciplinamiento social diseñado para salvaguardar los intereses foráneos frente a cualquier foco de inestabilidad social.

Esta redefinición de la paz no es semántica sino política. Al desplazar la transformación histórica de la violencia por el restablecimiento violento del orden, se someten los conflictos estructurales —como la desigualdad y la exclusión— a una comprensión puramente militar. En consecuencia, la construcción de paz corre el riesgo de ser sustituida por una administración armada del territorio, centrada en la represión de comunidades antes que en la resolución de sus causas profundas.

Esta ambigüedad en la definición de amenazas, al difuminar las fronteras entre el adversario político y el enemigo de seguridad, resulta peligrosa. Al consolidar conceptos imprecisos como la «milicianización», se abren márgenes amplios para la vigilancia y la criminalización de organizaciones sociales y liderazgos territoriales, lo cual erosiona directamente las condiciones democráticas necesarias para la movilización, la participación y la defensa de los derechos en el país.

Tal escenario resulta especialmente preocupante, pues esta articulación entre expansión extractiva y control poblacional convierte a las comunidades rebeldes en objetivos contrainsurgentes. Desde la noción de continuum bélico, el conflicto persiste mediante dispositivos que limitan la autonomía territorial. Así, la democracia y los derechos humanos deben operar como límites infranqueables frente a unas dinámicas depredadoras que suelen imponerse mediante la fuerza paraestatal.

Dicha convergencia evidencia la ratio de la nueva administración, donde la contracción de la dimensión social se compensa con un fortalecimiento de sus funciones oligárquicas, extractivas y policivas. Al articularse la desregulación y los incentivos financieros con estrategias de monitoreo remoto y la "mercenarización" se busca asegurar los flujos de inversión y la subsunción de espacialidades con gran potencial minero y energético, a menudo bajo la influencia de complejos militares extranjeros.

En última instancia, esta reconversión estatal no se limita a debilitar la institucionalidad democrática: procura reorganizar la cultura, modelar sensibilidades y disciplinar voluntades mediante formas cada vez más coactivas de persuasión. Su propósito es neutralizar la capacidad de resistencia de quienes sostienen una transformación moral y política capaz de sustraer a las mayorías de la brutalización impuesta por los intereses corporativos transnacionales. Frente a ello, la tarea democrática consiste en reconstruir una cultura crítica, fortalecer la organización popular y convertir la defensa de los derechos, la paz y lo común en una fuerza material capaz de disputar el horizonte de los deseos emancipatorios.

Referencias

Alliez, É., & Lazzarato, M. (2021). *Guerras y capital: Una contrahistoria.* Tinta Limón; La Cebra; Traficantes de Sueños.

De Zubiría Samper, S. (2026, 15 de abril). *Características del fascismo actual y procesos de fascistización societaria.* Revista Izquierda.https://revistaizquierda.com/caracteristicas-del-fascismo-actual-y-procesos-de-fascistizacion-societaria/

Defensores de la Patria. (2026a, 3 de junio). *Abelardo De La Espriella: firme con la comunidad afrodescendiente: «Colombia no ha tenido un presidente que los apoye tanto».* https://defensoresdelapatria.com/abelardo-de-la-espriella-firme-con-la-comunidad-afrodescendiente-colombia-no-ha-tenido-un-presidente-que-los-apoye-tanto/

Defensores de la Patria. (2026b, 30 de enero). *Conmigo rugirá la seguridad: así se recupera el control del país y se derrota al crimen.* https://defensoresdelapatria.com/conmigo-rugira-la-seguridad-asi-se-recupera-el-control-del-pais-y-se-derrota-al-crimen-2/

Defensores de la Patria. (2026c, 18 de marzo). *De La Espriella: «Como hijo del Caribe, me comprometo a saldar la deuda histórica del Estado con La Guajira».* https://defensoresdelapatria.com/de-la-espriella-como-hijo-del-caribe-me-comprometo-a-saldar-la-deuda-historica-del-estado-con-la-guajira/

Defensores de la Patria. (2026d). *Defensores de la Patria – Abelardo De La Espriella presidente 2026-2030: El milagro de los nunca. Primeras trece propuestas para reconstruir la Patria Milagro.* https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

Defensores de la Patria. (2026e, 13 de abril). Diálogo sí, bloqueos no: De La Espriella y el único marco posible para las reclamaciones ciudadanas. https://defensoresdelapatria.com/dialogo-si-bloqueos-no-de-la-espriella-y-el-unico-marco-posible-para-las-reclamaciones-ciudadanas/

Defensores de la Patria. (2026f, 13 de abril). Tren de Cercanías, dragado de Buenaventura y acueducto para el Pacífico: el plan de De La Espriella para Cali. https://defensoresdelapatria.com/tren-de-cercanias-dragado-de-buenaventura-y-acueducto-para-el-pacifico-el-plan-de-de-la-espriella-para-cali/

Durand, C. (2021). Tecnofeudalismo: Crítica de la economía digital (V. Goldstein, Trad.). La Cebra/Kaxilda.

Karp, A. C., & Zamiska, N. W. (2025). La república tecnológica: Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente (F. Pedrosa, Trad.). Tenos.

Marín Castrillón, A. (2026, 30 de julio). Los rasgos fascistas de dominación. Substack. https://alejandromarincastrillon.substack.com/p/los-rasgos-fascistas-de-dominacion

Nietzsche, F. (2022). Aforismos (A. Sánchez Pascual, Trad.). Edhasa.
ORZA. (2026, 16 de abril). Análisis comparado: Programas de gobierno presidenciales 2026-2030. https://orza.com.co/wp-content/uploads/2026/04/04.16-ORZA-informe-programas-de-gobierno-presidenciales-2026-1.pdf

Otero Prada, D. (2026, 15 de junio). Análisis crítico de las propuestas económicas de Abelardo de la Espriella. Corporación Latinoamericana Sur. https://www.sur.org.co/analisis-critico-de-las-propuestas-economicas-de-abelardo-de-la-espriella/

Sadin, É. (2018). La silicolonización del mundo: La irresistible expansión del liberalismo digital (M. Martínez, Trad.). Caja Negra Editora.

Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas (A. Giacometti, Trad.). Caja Negra Editora.

Strobl, N. (2022). La nueva derecha: Un análisis del conservadurismo radicalizado. Katz Editores.


05
POLICE

COYUNTURA

La configuración del enemigo político

*Por Jhonny Alejandro Marín Castrillón**

Abelardo de la Espriella ha anunciado su intención de sintonizar los intereses de Colombia con los de la administración Trump. Estados Unidos —EE. UU.— es una potencia en declive, aunque no por ello menos violenta y caótica. Si bien todo gobierno es autónomo para decidir sus principales alianzas, es importante exponer una serie de preocupaciones asociadas al nuevo gobierno. Estas giran en torno a distintas materias; sin embargo, para el desarrollo de este artículo resultan especialmente pertinentes aquellas relacionadas con el Estado, las alianzas internacionales y la política de seguridad, por sus efectos sobre la paz social y la garantía de los derechos humanos de la población colombiana. Todo ello se examina a partir de algunos anuncios y hechos que se han venido desarrollando.

Para este propósito, se desarrollarán cuatro capítulos orientados a presentar un argumento que evidencie el posible recrudecimiento de la violencia, así como una eventual degradación de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población colombiana.

**Filósofo, Especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica. Investigador y analista de la Corporación Crisállida en temas político, en Derechos humanos, conflicto armado y paz.*

Debilitamiento y subordinación nacional

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025, por sus siglas en inglés) redefine el enfoque de su política exterior y centra sus esfuerzos en el hemisferio occidental bajo el criterio de la defensa estricta del interés nacional. Esta política convierte

a América Latina en un terreno de competencia estratégica. Bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, se pretende disuadir la presencia de "potencias extrahemisféricas", como China y Rusia. El objetivo de fondo es garantizar el control de los recursos estratégicos, reconfigurar las cadenas de suministro y asegurar las rutas comerciales.

Lograr este objetivo, en las condiciones que requiere el capital norteamericano, conlleva la pérdida de soberanía. Esto se consigue mediante el debilitamiento del Estado, para lo cual se ha promovido la consigna de un Estado pequeño y austero. Dicho debilitamiento es inducido por la política norteamericana con el fin de generar dependencia del mercado, la banca y la industria armamentista. A su vez, esto implica un detrimento de lo público, es decir, de aquello que constituye la soberanía del Estado.

Las empresas estatales y públicas tienen como objeto financiar políticas dirigidas a los sectores más desfavorecidos y con menores posibilidades de superar la pobreza y la desigualdad, debido a sus limitados o nulos privilegios económicos, culturales, sociales y políticos. Ello significa que las utilidades de estas empresas, al igual que los impuestos, deben orientarse a garantizar el acceso a educación, salud, saneamiento básico, pensión, tecnología, tierra, insumos, condiciones dignas de

de trabajo y seguridad. Garantizar estas políticas de redistribución requiere un Estado fuerte y capaz de ejecutarlas. El debilitamiento y la reducción del Estado solo generan mayor desigualdad, pobreza, inseguridad y malestar social.

Como principio inverso, en la medida en que se eliminan leyes, normas de regulación, impuestos y políticas públicas, se fortalecen y priorizan los recursos públicos destinados a políticas de seguridad, control y vigilancia de la población. Esta, a su vez, es tratada como un posible enemigo si no acepta vivir bajo las condiciones que impone el capital, que usualmente son de miseria y desigualdad.

El ajuste a la política de seguridad y la constitución del enemigo

El actual mandatario de Colombia, como aliado de la administración Trump, ha realizado gestiones que subordinan al país a la NSS 2025. Como parte de este enclave, se ha anunciado un ajuste de la política de seguridad y se ha planteado la realización de un Plan Patriota 2.0. Hasta el momento se sabe que este plan priorizará la inteligencia estratégica, la inteligencia financiera, la ciberdefensa, la guerra electrónica, los sistemas antidrones, las comunicaciones, la vigilancia y el reconocimiento. El derrotero contempla fortalecer la movilidad aérea, el sostenimiento de capacidades, el entrenamiento, la interoperabilidad y la transferencia tecnológica a las Fuerzas Militares colombianas. Los lugares planteados para su implementación son los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Nariño, Chocó, Arauca y Antioquia, así como los denominados enclaves cocaleros y de minería ilegal.

Esto, según información pública de la reunión que sostuvo el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, con Joseph Humire, secretario adjunto de Guerra de Estados Unidos.

Esta focalización territorial no parece casual, en la medida en que coincide con departamentos atravesados por economías ilegales, corredores estratégicos de circulación y zonas donde también existen registros de recursos minerales y materiales estratégicos de interés para las nuevas tecnologías y los proyectos minero-energéticos. De allí que el reajuste de la política de seguridad pueda leerse no solo como una respuesta frente a la conflictividad armada y las rentas ilícitas, sino también como parte de una estrategia más amplia de aseguramiento territorial orientada a proteger áreas clave para la extracción, la infraestructura y la atracción de capital extranjero. En ese sentido, la priorización de estos espacios revela una convergencia entre contrainsurgencia, control de recursos y geopolítica de la seguridad.

El dispositivo que articula este entramado es el Escudo de las Américas, que hasta el momento solo expresa una voluntad política de subordinación, dado que carece de documento oficial, líneas de trabajo u objetivos públicos. Por ello, el anuncio de convertir a Medellín en la sede en Colombia de este escudo carece de sentido, ya que no existe una base suficiente para justificar una política pública o la asignación de recursos del Estado con ese propósito.

Si bien se carece de documentos oficiales, se puede inferir que la estrategia de la NSS 2025 se complementa con la realización de la Cumbre Antifa. En esta se presenta la Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos. Allí se configura el enemigo que encaja en su doctrina de seguridad nacional.

Cuando el secretario de Estado afirma ante 66 países invitados y funcionarios estatales que "es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora experimenta un resurgimiento (...) Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma: un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación" (EL PAÍS, 2026), establece una categoría política susceptible de ser tratada como amenaza de seguridad.

Bajo esta situación se está creando, constituyendo y perfilando un enemigo del Estado y, por tanto, de los países aliados. Este discurso busca justificar y legitimar la criminalización de un enemigo de Estados Unidos y, por extensión, de los gobiernos aliados.

Se desconoce si hubo participación oficial de algún colombiano en la Cumbre Antifa, pero sí se conoce la cercanía y afinidad política que tiene Abelardo de la Espriella con el secretario de Estado, Marco Rubio. Los anuncios de la administración de Abelardo coinciden con esa política de perfilamiento y constitución de un enemigo público. No importa si se trata de un periodista, líder social, migrante, pescador, campesino, anticapitalista, miembro de un grupo armado o integrante de una organización criminal. La eliminación de estas distinciones y la adjudicación generalizada de una conducta punible los ubica a todos como enemigos del Estado.

En la tradición teórica del derecho penal existe una diferenciación entre el inimicus —enemigo personal— y el hostis —enemigo político—.

El hostis judicatus —enemigo declarado—configura el núcleo del tronco de los disidentes o enemigos abiertos del poder de turno, del que participarán los enemigos políticos puros de todos los tiempos. Se trata de enemigos declarados, no porque declaren o manifiesten su enemistad, sino porque el poder los declara tales: no se declaran a sí mismos, sino que son declarados por el poder (Zaffaroni, 2006).

No todos los enemigos del Estado son enemigos públicos. Existen los hostis alienigena, que desde el derecho romano son aquellos que incomodan al poder por ser insubordinados e indisciplinados, es decir, por no cumplir las leyes y normas, o por ser extranjeros. Como todo extranjero o extraño, generan desconfianza. A ellos se les juzga por el incumplimiento de la norma y se desconfía de ellos por su procedencia. Sin embargo, su característica principal es que siguen siendo sujetos de derecho y se les juzga por sus actos —derecho penal de acto—. Por el contrario, la declaración de enemigo introduce subterráneamente una dinámica de guerra y dispone al Estado contra enemigos públicos de orden político. Estos son enemigos políticos porque su naturaleza se considera contraria a la del Estado. En este caso se juzga su identidad, su ser, y se les aplica el derecho penal de autor.

Establecer a un grupo de personas como enemigos del Estado, eliminando las distinciones y equiparando a quienes cometieron un hecho punible con quienes no lo hicieron, tiene como consecuencia la deshumanización y la negación de su condición de sujetos de derecho. En esa condición se exige su sometimiento al Estado o se les aplica la fuerza estatal. Como ejemplo se encuentran los lancheros y balseros eliminados por Estados Unidos en el mar Caribe sin que mediara orden de captura, prueba alguna o posibilidad de sindicarlos de una

acción delictiva. Bastó con señalarlos como narcotraficantes y como un peligro para el Estado norteamericano para justificar su asesinato, como si no fueran sujetos amparados por los derechos humanos, el debido proceso y la justicia penal de cualquier país.

La promesa del Estado policivo y el milagro bélico

Por el momento, solo podemos evaluar el gobierno de Abelardo a partir de sus anuncios y de los pocos actos que ha llevado a cabo como presidente. Por ello, examinaremos algunos pronunciamientos que permiten identificar el carácter del gobierno entrante y el riesgo que puede significar para la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del DIH en los territorios en conflicto. Abelardo ha anunciado ante la Fuerza Pública que: "Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley". (Caracol Radio, 2026).

Esa formulación anticipa un giro en la relación entre gobierno, Fuerza Pública y ciudadanía, reactivando un lenguaje político que históricamente ha servido para blindar institucionalmente el uso de la fuerza y desplazar al segundo plano las garantías de las víctimas. En un país con antecedentes históricos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones atribuidas a agentes estatales, un enunciado de ese tipo puede operar como señal de impunidad preventiva, al presentar la defensa irrestricta de policías y militares como sinónimo de legalidad y orden, desconociendo de manera clara los límites que imponen los derechos humanos y el DIH. De allí que, más que una simple declaración de respaldo institucional, la frase anuncia una

orientación política que podría profundizar la estigmatización al opositor político y a la protesta social, a la vez que debilita los estándares de verdad, justicia y garantías de no repetición.

Sumado a esto, Abelardo escala la retórica belicista al afirmar: "Vamos por ellos, los vamos a someter y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado". (Caracol Radio, 2026). Este tipo de formulaciones busca legitimar y justificar el uso desproporcionado de la fuerza pública, desconociendo las consecuencias ya probadas del accionar indiscriminado de las Fuerzas Militares y de la Policía. Convertir la amenaza en política de Estado constituye una señal profundamente preocupante en una sociedad que aún carga con la memoria de crímenes de Estado, y envía un mensaje adverso para la democracia, la oposición política y la construcción de paz en el conjunto del territorio nacional.

Ahora bien, frente a la reactivación de bombardeos, conviene señalar que esta política no es ilegal en sí misma, pero su legitimidad está condicionada por el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario. La experiencia reciente, como el bombardeo ocurrido en la madrugada del 10 al 11 de agosto del 2026, en el caserío Sinai, con civiles afectados, evidencia que este tipo de operaciones no puede ser evaluado solo desde la lógica de la eficacia militar, sino también desde sus impactos sobre la población y los riesgos que entraña cuando la distinción entre combatientes y no combatientes no se asegura plenamente. En ese sentido, habilitar ataques sin una valoración rigurosa de la presencia civil y de las medidas de precaución adoptadas debilita los principios de humanidad, proporcionalidad y necesidad, y termina por normalizar una

gramática de guerra que erosiona los fundamentos democráticos y humanitarios del uso de la fuerza estatal.

En materia de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado institucional, preventivo y de carácter constitucional para advertir sobre posibles riesgos derivados de algunas propuestas, declaraciones y designaciones anunciadas por Abelardo. A través de siete ejes temáticos, la Defensora formula recomendaciones orientadas a garantizar la libertad de expresión y de prensa, la protección de la oposición política, el respeto por la protesta social, la imparcialidad de las entidades de protección, la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz, la salvaguarda de los derechos de los pueblos étnicos, la protección ambiental, la educación pluralista y la atención a los colombianos en el exterior. Más que una crítica política, la carta constituye un llamado al cumplimiento de la Constitución, la jurisprudencia y las obligaciones internacionales del Estado, así como una invitación al diálogo institucional para prevenir retrocesos y fortalecer las garantías democráticas durante el nuevo gobierno. Lo que ha evidenciado Abelardo es la ausencia de respuesta a las preocupaciones y llamados formulados desde distintas orillas por las posibles consecuencias de sus posiciones como presidente de la República sobre la vida y la integridad de las personas.

A modo de conclusión

Este artículo busca presentar una lectura sobre la arquitectura del proyecto de poder de Abelardo de la Espriella y de su equipo de gobierno, y que esto corresponde, tanto a las obligaciones adquiridas con la administración Trump, como

por la tendencia ideológica de Abelardo y equipo de gobierno. No se hace el análisis en base en nombramientos del gabinete ministerial, sino en señalar y evidenciar que la operación política y discursiva consiste en borrar la diferencia entre organizaciones criminales, grupos armados no estatales, oposición política, periodistas, anticapitalistas, antifascistas, marxistas, entre otros, para que a todos se les pueda aplicar el tratamiento de enemigos del Estado. Ese es el riesgo para los derechos humanos y para la vida que enfrentamos en Colombia.

En ese sentido, la lucha por la paz en Colombia no puede entenderse únicamente como la defensa de lo firmado en 2016, sino como una resistencia activa frente a esta nueva arquitectura de guerra que se presenta bajo el lenguaje del orden y la legalidad. Sostener la movilización por la justicia social, por la búsqueda de una salida dialogada al conflicto armado, por la dignidad de las víctimas y por el respeto irrestricto al DIH es condición necesaria para que podamos vivir en un país democrático y en paz.

Referencias

Caracol Radio. (2026, 20 de julio). Abelardo de la Espriella promete reivindicar a las Fuerzas Militares desde el Gobierno. https://caracol.com.co/2026/07/20/abelardo-de-la-espriella-promete-reivindicar-a-las-fuerzas-militares-desde-el-gobierno/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (s. f.). OEA/Ser.L/V/II.84, doc. 39 rev. 2.° Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. ONU-DH Colombia. https://www.hchr.org.co/informes_onu/oea-ser-l-v-ii-84-doc-39-rev-cidh-2o-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia/

Defensoría del Pueblo. (2026, 31 de julio). Carta de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al presidente electo Abelardo de la Espriella. https://www.defensoria.gov.co/-/carta-de-la-defensora-del-pueblo-iris-marin-ortiz-al-presidente-electo-abelardo-de-la-espriella

EL PAÍS. (2026, 16 de julio). Marco Rubio convoca a 66 países a un encuentro para combatir a "los extremistas de izquierda" en todo el mundo. https://elpais.com/internacional/2026-07-16/rubio-convoca-a-60-paises-a-un-encuentro-para-combatir-a-los-extremistas-de-izquierda-en-todo-el-mundo.html

Federación Internacional por los Derechos Humanos. (2026, 17 de junio). Colombia: candidatura de Abelardo de la Espriella presenta riesgos para los derechos humanos. https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-candidatura-de-abelardo-de-la-espriella-presenta-riesgos

Revista RAYA. (2026, 26 de julio). Plan Patriota: pacto militar EE.UU.-De la Espriella, ¿derechos de los colombianos en riesgo? [Episodio de podcast]. Spotify. https://open.spotify.com/episode/0Tv85xvwcLF3pjvmcpT4HQ?si=efb6257b567d43e1

Revista RAYA. (2026,13 de agosto). Abelardo de la Espriella va a secundar al amo imperial: Estados Unidos. Entrevista con Renan Vega. [Episodio de podcast]. https://open.spotify.com/episode/7jhH4qmJl0j8y1hZXzTAOz?si=akTHN_B7QtGRhAq9KOV9DQ

The White House. (2026, mayo). 2026 USCT Strategy 1 [PDF]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/2026-USCT-Strategy-1.pdf

Uribe de Hincapié, M. T. (2023). Nación, ciudadano y soberano. Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia.

Zaffaroni, E. R. (2006). El enemigo en el derecho penal (5.ª reimp.). Ediar.

Página de apuntes

Esta primera edición de PUPA se terminó de maquetar e incubar en Santiago de Cali, Colombia, en agosto de 2026.

Crisállida
Investigación e Incidencia para la Paz y la Vida